



# ESPAÑA

**INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE  
DE ESPAÑA ANTE LAS NACIONES UNIDAS**

**EXCMO. SEÑOR JUAN PABLO DE LAIGLESIA**

**EN EL NOVENO PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE ESTADOS  
PARTES DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL**

**Nueva York, 6 de diciembre de 2010**

**(Cotejar con intervención definitiva)**

---

**STATEMENT BY THE AMBASSADOR  
PERMANENT REPRESENTATIVE OF SPAIN  
TO THE UNITED NATIONS**

**HE MR. JUAN PABLO DE LA IGLESIA**

**AT THE NINTH SESSION OF THE ASSEMBLY OF STATES PARTIES OF THE  
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT**

**New York, 6 December 2010**

**(Unofficial translation, check against delivery)**

Sr. Presidente,

Permítame, antes de iniciar mi intervención, expresar una vez más la satisfacción de mi delegación al verle de nuevo presidir este período de sesiones de la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional. Estamos convencidos de que bajo su eficaz presidencia la Asamblea encontrará el rumbo adecuado en esta nueva etapa que se abre tras la celebración de la Conferencia de Kampala, en la que la Corte está llamada a actuar como una institución consolidada y madura en el ámbito de la justicia penal internacional.

Permítame, asimismo, felicitar a las Seychelles, Santa Lucía y la República de Moldavia, los tres países que se han convertido en Estados Partes desde la última Asamblea, y congratularme así de que los objetivos que persigue la Corte, y los valores que promueve, van progresando paulatinamente hacia una aceptación universal.

Deseo también felicitar a los seis miembros recién elegidos del Comité de Presupuesto y Finanzas, y subrayar la importancia de la función de este órgano, clave para que la actividad de la Corte se desarrolle en un contexto de eficiencia, racionalidad presupuestaria y óptima administración de los recursos. Extiendo mi felicitación al Presidente de la Corte, los jueces, el Fiscal, la Secretaria y a todos los que con su trabajo contribuyen a hacer avanzar el día a día de esta institución. Permítame manifestar también mi agradecimiento a los Grupos de Trabajo de la Mesa en La Haya y en Nueva York y a la Secretaría de la Asamblea de Estados Partes por el trabajo que han realizado en la preparación de esta sesión. Quiero asimismo expresar mi reconocimiento a las ONGs por su valiosa contribución en los asuntos relacionados con la Corte, que suponen para todos un enriquecimiento imprescindible de la reflexión en torno a esta institución.

Sr. Presidente,

Mi delegación se remite y apoya la declaración realizada por Bélgica en su condición de Presidencia de la Unión Europea, cuyas consideraciones y preocupaciones compartimos sin reservas. Partiendo de las mismas, permítame expresar algunas reflexiones añadidas.

Con la perspectiva que empiezan a dar los meses transcurridos, quiero subrayar en mi intervención la importancia que para la Corte Penal Internacional ha tenido la Conferencia de Kampala y el proceso que ha conducido hasta ella. Hay que saludar como un hito en el Derecho internacional penal la adopción por consenso de las enmiendas relativas al crimen de agresión, en la que se tipifica dicho crimen y se establecen las condiciones para que la Corte ejerza su jurisdicción sobre el mismo, todo ello en una Resolución en la que además se identifica el procedimiento para la entrada en vigor de estas enmiendas. Por otra parte, la adopción de la enmienda al artículo 8 del Estatuto de Roma tiene el especial valor de ampliar la jurisdicción de la Corte en materia de crímenes de guerra cometidos en situaciones de

conflicto armado interno, alineando dicha jurisdicción con la que opera en relación con los mismos crímenes cometidos en situaciones de conflicto armado internacional. Ello contribuye sin duda a una mayor coherencia e integración de las normas internacionales que sancionan las más graves violaciones del Derecho internacional humanitario.

No conviene perder de vista el valor de lo logrado en la primera Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma, cuya importancia, sin duda, se irá haciendo más evidente a medida que el tiempo nos permita contemplarla desde la distancia, y se vaya comprendiendo progresivamente su alcance. El hecho de que la adopción de una enmienda técnica y políticamente tan compleja como la relativa al crimen de agresión haya sido fruto del consenso, nos permite ser conscientes de algunas de las virtudes que los Estados partes pusimos en juego en Kampala. En efecto, sin la voluntad integradora, la cuidadosa ponderación de intereses y la creatividad mostrada a lo largo de la Conferencia ésta no hubiese resultado el éxito que fue. Estas virtudes, ejercidas en el momento en que más importaba, nos permiten además confiar en lo mucho que podemos lograr juntos en el futuro. Por otro lado, deseo destacar la importancia del innovador ejercicio de balance en torno a la justicia penal internacional realizado en Kampala, cuyos resultados han de servir de guía para la actividad de la Corte en materia de víctimas y comunidades afectadas, complementariedad, cooperación y relación entre paz y justicia.

El futuro de la Corte pasa en primer lugar por el seguimiento de los resultados de la Conferencia. Es importante que los Estados partes demos con la mayor rapidez posible los pasos necesarios para la ratificación de las enmiendas, y la aplicación de las resoluciones y declaración con que culminó el ejercicio de balance.

Es igualmente importante que los Estados vayamos dando cumplimiento de las promesas realizadas en Kampala.

En este sentido, me complace poder decir que mi país está avanzando de forma resuelta en el cumplimiento de sus promesas en materia de cooperación con la Corte y de apoyo a las víctimas de los crímenes de su competencia, así como en lo relativo a la promoción de la universalidad e integridad del Estatuto de Roma. También me complace recordar la importancia que España otorga a la cooperación internacional para reforzar la capacidad de los sistemas judiciales nacionales. Nuestra cooperación con Colombia, con la Organización de Estados Americanos, o con Ruanda, son buenos ejemplos de la voluntad de integrar esta variable en los programas de la cooperación española.

Sr. Presidente,

Esta 9º período de sesiones de la Asamblea de Estados Partes nos ofrece una oportunidad inapreciable para desarrollar un nuevo modo de comprender las realidades presupuestarias de la Corte Penal Internacional. Un síntoma infalible de la consolidación de cualquier institución es haber alcanzado un cierto grado de madurez presupuestaria, lo que implica entre

otras cosas lograr un óptimo equilibrio entre necesidades y recursos teniendo en cuenta el contexto económico y financiero en que ha de realizar las funciones que le son propias. España está a favor de la máxima austeridad y rigor presupuestario, sin otro límite que la necesidad de garantizar que la Corte esté en condiciones de cumplir las funciones que le atribuye el Estatuto de Roma. A la vista de las difíciles circunstancias económicas del presente, es preciso enviar una señal política de austeridad, contención y máxima eficiencia en la administración, sin la cual la Corte podría ver mermado el apoyo que su noble misión suscita. Este deseable realismo presupuestario tendrá a largo plazo consecuencias positivas en nuestro modo de comprender los problemas actuales de la Corte, y muy especialmente los asuntos relativos a su gobernanza, en aras de una mayor eficacia y eficiencia de la institución. Somos conscientes de que la propia Corte comparte estas ideas, y de que ya está llevando a cabo esfuerzos en esta dirección.

Otra de las oportunidades que tiene ante sí la Corte es desarrollar los mecanismos previstos en el Estatuto para procurar que sus cargos reúnan los requisitos necesarios y la más alta cualificación posible para el desempeño de sus funciones. En este sentido, mi delegación considera que ha llegado ya el momento propicio para reflexionar sobre el establecimiento, composición y mandato del Comité Asesor previsto en el artículo 36.4 c) del Estatuto de Roma. No se trata de establecer un órgano que sustituya a los Estados partes en la responsabilidad de la elección de los jueces, sino de crear una instancia que, sin generar cargas administrativas y económicas innecesarias para la Corte, ayude los Estados partes a elegir a los mejores para el desempeño de las altas funciones judiciales previstas en el Estatuto de Roma.

El programa de este noveno período de sesiones de la Asamblea de Estados Partes incluye el establecimiento de un Grupo de Trabajo sobre las enmiendas no enviadas a la Conferencia de Revisión, materia que es imprescindible enfocar con acierto desde el primer momento. A este respecto, es preciso aprovechar las lecciones aprendidas de la rica experiencia que para la Asamblea de Estados Partes han supuesto los cinco años de trabajos del Grupo Especial sobre el Crimen de Agresión. Sería por tanto necesario, en este momento inicial, concentrar nuestros esfuerzos en definir los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo sobre Enmiendas, partiendo de que dotarse de los métodos y procedimientos más acordes con la realidad de la Corte Penal Internacional es el primer paso para abordar adecuadamente un proceso tan complejo como el de enmendar el Estatuto de Roma.

Sr. Presidente,

Permítame terminar mi intervención reiterando de modo solemne el firme compromiso de España con la Corte Penal Internacional, institución que mi país apoyó desde sus momentos fundacionales, y cuya misión consistente en poner fin a la impunidad de los más graves crímenes de trascendencia para la comunidad internacional contemplamos con profundo respeto.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

Mr Chairman,

At the beginning, allow me to express the satisfaction of my delegation to see you presiding, once again, over this Session of the Assembly of States Parties of the International Criminal Court. We are convinced that under your efficient chairmanship, the Assembly will find the right direction as it moves into the new phase opening up after the Kampala Conference—a time when the Court is called to act as a mature, consolidated institution in the sphere of international criminal justice.

Likewise, allow me to congratulate the Seychelles, Saint Lucia and the Republic of Moldova, the three countries that have become States Parties since the last Assembly, and to welcome the fact that the goals pursued by this Court, and the values it promotes, continue to advance steadily towards universal acceptance.

I would also like to congratulate the six recently elected members of the Committee on Budget and Finance, and highlight the importance of this body's work, which is key to the initiatives that the Court is carrying out in these times when efficiency, budgetary restraint, and optimal resource administration are the watchwords. I extend my congratulations to the President of the Court, the judges, the Prosecutor, the Secretary, and all those who, with their efforts, are contributing to this institution's progress day by day. Allow me to also express my thanks to the Working Groups of the Bureau in The Hague and New York, and to the Secretariat of the Assembly of States Parties, for their work in preparing this Session. I would also like to express my acknowledgment of the valuable contribution that NGOs are making on Court-related issues, one that enriches us all through their essential reflections on what this institution means.

Mr Chairman,

My delegation would like to recall its support for the statement made by Belgium, as current holder of the Presidency of the European Union. We unreservedly share its reflections and concerns. From this starting point, allow me to make some additional comments.

From the perspective of the months that have passed since then, I would like to highlight in my remarks today the importance for the International Criminal Court of the Kampala Conference, and the process leading up to it. We must celebrate, as a landmark in international criminal law, the adoption by consensus of the amendments regarding the crime of aggression, which defines this offence and establishes the conditions under which the Court may exercise its jurisdiction—all of this in a Resolution that also identifies the procedures for these amendments to take effect. Furthermore, the adoption of the amendment to Article 8 of the Rome Statute has the special value of expanding the Court's jurisdiction regarding war crimes committed in situations of internal armed conflict, aligning this jurisdiction with the one related to the same offences when committed in situations of international armed conflict. This undoubtedly contributes to greater consistency and integration within the body of



international statutes sanctioning the most serious violations of international humanitarian law.

We should not forget the value of the results achieved at the first Review Conference on the Rome Statute. Their importance will undoubtedly become more and more evident as we gain the perspective of time, enabling us to better understand their impact. The fact that an amendment as technically and politically complex as the one regarding the crime of aggression was adopted by consensus makes us aware of some of the strong points that the States Parties showed in Kampala. Indeed, without our integrative commitment, careful consideration of the interests involved, and the creativity shown throughout the Conference, it would not have been such a success. Moreover, these virtues, coming to the fore when it mattered most, enable us to trust that we will be able to attain so much more together in the future. In addition, I would like to highlight the importance of the innovative stocktaking exercise that we saw in Kampala regarding the situation of international criminal justice, which should serve as a road map for the Court's initiatives regarding victims and affected communities, complementarity, cooperation, and the relationship between peace and justice.

The future of the Court involves, first of all, our following up the results of the Conference. It is important that the States Parties take, as soon as possible, the necessary steps to ratify the amendments and to implement the resolutions and the declaration crowning the stocktaking exercise.

It is equally important that the States fulfil the promises made in Kampala.

In this respect, I am pleased to say that my country is advancing resolutely towards fulfilling its promises with regard to cooperating with the Court, supporting the victims of crimes within its competence, and promoting the universality and integrity of the Rome Statute. I am also pleased to recall the importance that Spain gives to international cooperation aimed at capacity building within national judicial systems. Our cooperation with Colombia, the Organization of American States and Rwanda are good examples of our resolve to include this variable in Spanish cooperation programmes.

Mr Chairman,

This 9<sup>th</sup> Session of the Assembly of States Parties offers us an invaluable opportunity to develop a new way of understanding the budget realities of the International Criminal Court. An infallible symptom of the consolidation of any institution is achieving a certain degree of budget maturity, which involves, among other things, striking an optimal balance between needs and resources, bearing in mind the economic and financial context in which it must perform its duties. Spain favours maximum budget austerity, with no other limit than the need to ensure that the Court is able to perform the duties entrusted to it by the Rome Statute. In view of today's difficult economic circumstances, we must convey a political message of austerity, restraint and utmost efficiency in public

administration, without which the Court could lose some of the support that its noble mission inspires. This sought-after budget realism will have, in the long term, positive consequences for our understanding of the Court's current problems—and, most especially, of issues regarding its governance, in the interest of the institution's greater effectiveness and efficiency. We are aware that the Court shares these ideas, and that it is already making efforts in this direction.

Another opportunity facing the Court is developing the mechanisms envisaged in the Statute to ensure that its leaders meet the necessary requirements and are as highly qualified as possible to perform their duties. In this regard, my delegation considers that the time has come to reflect on the creation, membership and mandate of the Advisory Committee set forth in article 36.4c) of the Rome Statute. It is not a question of creating a body to replace the States Parties in their responsibility to elect judges, but of creating an authority which—without generating unnecessary administrative and economic burdens for the Court—may help States Parties elect the best candidates to perform the high judicial duties set forth in the Rome Statute.

The programme for this 9<sup>th</sup> Session of the Assembly of States Parties includes creating a Working Group on Amendments not sent to the Review Conference, an issue which it is essential to address appropriately from the outset. Here, we must make the most of lessons learnt from the valuable experience garnered by the Assembly of States Parties in the five years' work of its Special Group on the Crime of Aggression. It would, therefore, be necessary, at this first stage, to focus our efforts on defining the methods of this Working Group on Amendments, based on the idea that achieving methods and procedures more in line with the reality of the International Criminal Court constitutes the first step towards properly addressing such a complex process as that of amending the Rome Statute.

Mr Chairman,

Please allow me to finish this statement by solemnly reiterating Spain's firm commitment to the International Criminal Court, an institution which my country has supported since its inception, and whose mission—that of putting an end to impunity for the most serious crimes affecting the international community—we so deeply respect.

Thank you very much, Mr Chairman.